



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-022-2019-00457-01
Demandante:	Luz Marina Echavarría de Pérez
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación y consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Reliquidación pensión Decreto 546 de 1971

Medellín, marzo seis (06) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, procede, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 21 de noviembre de 2022, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZ MARINA ECHAVARRÍA DE PÉREZ

en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-022-2019-00457-01

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora LUZ MARINA ECHAVARRÍA DE PÉREZ, llamó a juicio a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo se declare que es beneficiaria del régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, que en atención a ello y por haber laborado más de 27 años al servicio de la Procuraduría General de la Nación, tiene derecho a que la pensión le sea reconocida con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en consecuencia, se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez con fundamento en lo normado en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971 y se ordene la indexación de las sumas adeudadas.

En respaldo de tales pedimentos, se indicó que la señora Luz Marina Echavarría de Pérez, nació el 11 de noviembre de 1955, siendo beneficiaria del régimen de transición pensional, que la actora trabajó en forma ininterrumpida y continua al servicio de la Procuraduría General de la Nación, desde el 6 de diciembre de 1990 y hasta el 31 de enero de 2017.

Se expuso que Colpensiones mediante Resolución GNR 171389 del 14 de junio de 2016, reconoció la pensión de vejez a la demandante, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con una mesada pensional de \$777.854, prestación que fue dejada en suspenso, en tanto la accionante aún se encontraba laborando, asimismo, por medio de las resoluciones GNR 316033 del 27 de octubre de 2016 y VPB 655 del 17 de febrero de 2017, la accionada reliquidó la mesada pensional, fijando la misma en \$857.203, negando la calidad

de beneficiaria del régimen de transición, al señalar que solo se acreditan 745 semanas al Acto Legislativo 01 de 2005, agrega que, contrario a lo señalado por Colpensiones, la demandante a la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 752.45 semanas cotizadas.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente COLPENSIONES responde el escrito impulsor, aceptando como ciertos los hechos del libelo incoativo de la acción, con excepción de lo referente al número de semanas cotizadas a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, señalando que la actora no acredita los requisitos para acceder a la pensión en los términos del Decreto 546 de 1971, al no ser beneficiaria del régimen de transición.

En oposición a la prosperidad de las excepciones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; indexación de la condena; prescripción; buena fe de Colpensiones; compensación; excepción innominada e imposibilidad de condena en costas y agencias en derecho.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, decide el litigio mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022, por medio de la cual declaró que el derecho pensional por vejez reconocido por Colpensiones a la señora Luz Marina Echavarría de Pérez, tiene como fundamento el Decreto 546 de 1971, aplicado por vía de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993: declaró que la primera mesada pensional de la actora para el año 2017 es de \$1.037.539, siendo la mesada de 2022 de \$1.241.335 y que dicho

derecho comprende mesada 14 en cada año; condenó a Colpensiones a pagar los reajustes por las diferencias pensionales desde el 1° de marzo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2022, asimismo, la mesada adicional del año 2017 al año 2022; condenó a Colpensiones al pago de la indexación de cada reajuste y condenó en costas a la pasiva.

1.4. APELACION

La apoderada de Colpensiones interpone el recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que, contrario a lo indicado por el juez, la demandante no cumple con los requisitos para que la pensión de vejez le sea reconocida en los términos del artículo 6° del Decreto 546 de 1971, pues conforme a la historia laboral contaba con 749 semanas al 31 de julio de 2010 y si bien la demandante gestionó ante la entidad solicitudes de corrección de historia, Colpensiones desplegó las acciones necesarias con el fin de realizar la contabilización de las semanas de la demandante, tal y como se evidencia en diferentes comunicaciones enviadas a la misma y una vez efectuadas todas las correcciones de la historia laboral, se concluyó que la actora no contaba con los requisitos para extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014 y en razón a ello, se le reconoció la pensión en aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2203.

En el evento de que se considere que la decisión debe ser favorable a la demandante, solicita, se tenga en cuenta que la aplicación de los beneficios transicionales solo procede para la edad, semanas y tasa de reemplazo, por lo que no debe aplicarse el régimen de transición para calcular el ingreso base de liquidación, teniendo en cuenta factores salariales. Igualmente, se tenga en cuenta que una cosa es la causación de la prestación y otra su disfrute, por lo que la prestación económica se debe reliquidar a partir del año 2017, como se dijo en primera instancia.

1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal se pronunció la apoderada de Colpensiones, reiterando los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de alzada, a fin de que no se acoja la sentencia de primera instancia, insistiendo que la actora, no acredita el cumplimiento de requisitos para extender el régimen de transición hasta el año 2014, sin que se hubiera consolidado el derecho pensional antes del 31 de julio de 2010. Igualmente, solicita se revise la condena en costas impuesta a la entidad.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Igualmente procede la consulta en favor de Colpensiones, en los aspectos no apelados, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.*”

2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

No son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

- Que la señora Luz Marina Echavarría de Pérez, nació el 11 de noviembre de 1955, conforme a la copia de su cédula de ciudadanía visible a folio 1 del anexo 03 del expediente digital.

- Que la promotora del proceso laboró en la Procuraduría General de la Nación, desde el 6 de diciembre de 1990 al 31 de enero de 2017, tal y como se desprende de las certificaciones expedidas por la entidad, visibles a folios 16 a 20 y 59 a 62 del anexo 03 del expediente digital, iniciando cotizaciones al extinto ISS a partir del 1° de julio de 1998.

- Que Colpensiones reconoció la pensión de vejez a la demandante por medio de la Resolución GNR 171389 del 14 de junio de 2016, con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, reconociendo como valor de la mesada pensional para el año 2016 \$777.854, prestación que deja en suspenso hasta que se allegue acto administrativo de retiro definitivo, véase folios 22 a 28 del anexo 03 del expediente digital.

- Que posteriormente, Colpensiones a través de la Resolución GNR 31603 del 27 de octubre de 2016, reliquidó la prestación económica de la actora, fijando como valor de la mesada pensional para el año 2016 \$798.046 y finalmente, mediante Resolución VPB 6551 del 17 de febrero de 2017, ordena el ingreso a nómina de pensionados a partir del 1° de febrero de 2017, con una mesada pensional equivalente a \$857.203, tal y como se desprende de los documentos que militan a folios 40 a 48 y 20 a 57 del anexo 03 del expediente digital.

- Que la pretensora solicitó a Colpensiones la reliquidación de la prestación económica de vejez, en aplicación del régimen de transición

pensional el 18 de enero de 2018, petición que fue atendida desfavorablemente mediante Resolución SUB 61135 del 2 de mayo de 2018.

2.3. PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida en el presente proceso por el señor Juez Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin si la demandante conserva el beneficio del régimen de transición pensional, hasta el 31 de diciembre de 2014 y en caso afirmativo, si procede la reliquidación de la pensión de vejez, bajo los parámetros del artículo 6° del Decreto 546 de 1971?

2.4. TESIS

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual, la demandante es beneficiaria del régimen de transición pensional, encontrándose cobijada por el Decreto 546 de 1971, siendo procedente la reliquidación de la pensión de vejez. En consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA, MODIFICADA en relación al valor de la mesada pensional y ADICIONADA, como se explica:

2.5. PREMISAS NORMATIVAS

Por regla general, el derecho a la pensión de vejez, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se adquiere una vez confluyen los requisitos de edad y número de cotizaciones o tiempo de servicio señalado por el legislador en la norma vigente para el momento en que se origina el derecho.

Por excepción y para mitigar el impacto del cambio normativo el legislador consagró un régimen de transición, entratándose de la citada prestación, en protección de la expectativa legítima de quienes se encuentran próximos a consolidar su derecho pensional bajo las normas derogadas.

En esta perspectiva el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“...La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados...”

Respecto a la definición del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha adoctrinado que corresponde a aquel en el que registra afiliación, así se planteó en sentencia SL6557-2017

“Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado, en el sentido de señalar como resultado de la hermenéutica impartida al artículo 36 de la Ley 100 citado, que un correcto entendimiento del precepto conduce a que la aplicación de un régimen pensional precedente reclama de parte del interesado su pertenencia a él antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones, es decir, tiene que haberlo cobijado en algún momento en que ese régimen anterior tuvo vigencia, por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo. Esta situación es distinta a la circunstancia de no ser cotizante activo a 1° de abril de 1994, pues en esta hipótesis la persona sí pertenecía a algún régimen, pero no se encontraba sufragando aportes al momento del tránsito legislativo.

En similar sentido en sentencia SL 3971 Radicación 78890 del 8 de septiembre del 2021, iteró:

...“Sobre el particular, esta Sala de la Corte ha insistido en memorar su criterio vigente y pacífico, según el cual para favorecerse del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, rigurosamente el actor debe haber estado afiliado al sistema anterior con el que pretenda pensionarse, ya que es el que genera una expectativa legítima susceptible de protección legal, que es, por demás, la garantía de remisión, preservación y aplicación de regímenes pensionales anteriores que subyace a esa figura legal, y así, precisamente, fue recientemente recordado en sentencia CSJ SL3045-2021, la cual resolvió un caso con similares contornos.

Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia SU273 de 2022, precisó que la afiliación previa no es condición para ser beneficiario del régimen de transición.

“En la actualidad existe un precedente unificado, pacífico, uniforme y reiterado que rechaza la exigencia de haber estado afiliado o haber cotizado al ISS para la fecha de entrada de la Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994), como condición para aplicar de manera ultractiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990. Eso para petitionarios beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y por las siguientes razones: (i) porque no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia; se trata en realidad de una regla sin un sustento adicional al criterio de COLPENSIONES o de algunos jueces que han omitido tener en cuenta el precedente vinculante explicado en los fundamentos jurídicos anteriores; (ii) es contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna, y (iii) vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse, al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable, previo al consagrado en la Ley 100 de 1993.”

2.6. CASO CONCRETO

2.6.1. Aplicación del régimen de transición

Teniendo en cuenta que la demandante, nació el 11 de noviembre de 1955 y para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos, contaba con 39 años de edad, es beneficiaria del régimen de transición, condición que, en principio le permite acceder al derecho pensional bajo las reglas de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión del régimen anterior al cual se encontraba afiliada.

Asimismo, contrario a lo sostenido por Colpensiones tanto en sede administrativa, como en sede judicial, la accionante conserva el régimen de transición bajo los lineamientos del acto legislativo 01 de 2005, en tanto que acredita **750.74** cotizadas al 29 de julio de 2005, cifra que alcanza conforme lo certificado por la Procuraduría General de la Nación, empleador de la actora y lo reportado por Colpensiones en la historia laboral. Aunado a lo anterior, quedó en evidencia, que la historia laboral de la pretensora presenta algunas inconsistencias, pues en los ciclos septiembre de 1999, febrero, abril, mayo, agosto y septiembre de 2002, se reportan 30 días y la entidad adiestradora de pensiones, solo reconoce 27 días cotizados y en el ciclo diciembre de 2022, se reportan 30 días y solo son tenidos en cuenta 26, estando acreditado, que la gestora del proceso radicó ante Colpensiones solicitud de corrección de historia laboral, el 19 de enero de 2016 y el 26 de junio de 2016, sin que exista justificación alguna, para que Colpensiones no hubiera procedido a tal corrección, pues se aporta con las solicitudes las certificaciones emitidas por la Procuraduría en las cuales da cuenta no solo de la prestación del servicio de la actora, sino del pago de las cotizaciones, concluyendo que con estos días que están en discusión y que no pueden desconocerse, acumula la actora **753.8 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005.**

Así las cosas, no existe duda que la señora Luz Marina Echavarría de Pérez, conservó el beneficio del régimen de transición pensional, y en virtud de ello, el régimen que le es aplicable corresponde al Decreto 546 de 1971, por el cual se

establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares, pues tampoco se discute, la prestación del servicio de la actora en la Procuraduría General de la Nación, como auxiliar de servicios 3 y oficinista 6, siendo claro igualmente que la misma fue empleada oficial.

2.6.2. Cumplimiento de requisitos del Decreto 546 de 1971

La norma en cita, en su artículo 6°, establece los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, así:

“Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

La señora Luz Marina Echavarría de Pérez, demostró el cumplimiento de la edad mínima pensional, de 50 años para el 11 de noviembre de 2005 y en cuanto al segundo requisito atinente al tiempo de servicios, se constata a folios 16 a 20 del anexo 03 que la promotora del proceso ingresó a prestar sus servicios en forma ininterrumpida a la Procuraduría General de la Nación, el 6 de diciembre de 1990, y laboró hasta el 31 de enero de 2017, es decir, por espacio de 26 años, 1 mes y 25 días, arrojando a los 20 años de servicios el 6 de diciembre del año 2010, fecha en la cual causa el derecho a la prestación económica.

En relación a esta prestación, y la forma en la cual debe calcularse la mesada pensional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL4328 de 2022, señaló:

“Pues bien, en el marco de distintas demandas extraordinarias de revisión promovidas por la UGPP contra sentencias judiciales, esta Corporación ha analizado idénticos problemas jurídicos.

Así, respecto al primero de ellos, en la sentencia de revisión CSJ SL3276-2018, reiterada en CSJ SL4607-2020, esta Sala mantuvo su criterio conforme al cual, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en la Ley 100 de 1993, el cual, valga recordar, puede ser el consagrado en el artículo 21 o en el 36 de esa ley, dependiendo de si al afiliado le hacía falta un tiempo igual o superior a 10 años para causar el derecho o un tiempo inferior. Lo anterior, sin importar cuál sea el régimen anterior que le resulte aplicable en virtud de las normas que gobiernan la transición pensional (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada en CSJ: SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, SL15602-2014, SL6476-2015, SL12998-2015, SL8563-2016, SL9808-2016, SL2510-2017, SL4093-2017, SL13184-2017 y SL2954-2021).

En efecto, en sentencia CSJ SL3276-2018, a cuyos argumentos se remite la Corte para reafirmar su posición en esta oportunidad, se explicó:

Cabe destacar que desde los albores del nuevo sistema general de pensiones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo de forma pacífica, reiterada y unívoca que la transición no supuso la prórroga indefinida de los regímenes pensionales anteriores en todos sus componentes, sino respeto de las tres condiciones ya mencionadas, por lo que los demás aspectos, tales como la base reguladora o ingreso base de liquidación, se rigen, íntegramente, por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982-2015, CSJ SL17021-2016, SL2510-2017 y SL057-2018, entre muchas otras más).”

Y más adelante indicó:

“En lo relativo al segundo problema jurídico, en la misma sentencia CSJ SL3276-2018, la Corte respaldó su criterio consolidado según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición son los consignados en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, modificadorio del artículo 6.º del Decreto 691 de 1994. En efecto, en la referida providencia, que a su vez reiteró las decisiones CSJ SL, 29 may. 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017.”

Colofón de lo expuesto, es claro que, para el caso concreto, tratándose de pensiones de servidores públicos beneficiarios del régimen de transición pensional, para efectos de liquidar la prestación debe tenerse presente el IBL establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales consagrados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994.

Claro lo anterior, bajo la egida de la consulta, procede la Sala a revisar la liquidación efectuada por el Juzgado, advirtiendo que el IBL hallado por el a quo, lo fue de \$1.383.386, mientras que el liquidado en esta oportunidad por la Sala lo fue de \$1.379.694, evidenciando como motivos de diferencia que el Juzgado para el mes de diciembre de 2014, tuvo en cuenta como IBC \$1.727.163, cuando el IBC correcto, conforme a la certificación obrante a folios 61 y 62 del anexo 03 del expediente digital es de \$1.145.587, asimismo, se tiene que como tasa de reemplazo el juzgado utilizó la del 75.89%, la cual es ajustada por la tabla a 76%, cuando la tasa a aplicar es del 75%, llamando también la atención que en primera instancia se consignen IBC hasta el febrero de 2017, cuando la actora finalizó su relación laboral el 31 de enero de 2017.

Por lo anterior, deberá modificarse la sentencia en sus numerales segundo y tercero, señalando que el valor de la mesada pensional para el año 2017, corresponde a \$1.034.771, correspondiendo a la actora, el reconocimiento del siguiente retroactivo por concepto de reliquidación de la pensión de vejez, liquidado desde el 1° de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023, advirtiéndose que a partir del 1° de marzo del año en curso, Colpensiones deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional en cuantía de \$1.400.452.

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2017	4,09%	\$ 857.203	\$ 1.034.771	\$ 177.568	12	\$ 2.130.816
2018	3,18%	\$ 892.263	\$ 1.077.093	\$ 184.831	13	\$ 2.402.797
2019	3,80%	\$ 920.637	\$ 1.111.345	\$ 190.708	13	\$ 2.479.206
2020	1,61%	\$ 955.621	\$ 1.153.576	\$ 197.955	13	\$ 2.573.416
2021	5,62%	\$ 971.006	\$ 1.172.148	\$ 201.142	13	\$ 2.614.848
2022	13,12%	\$ 1.025.577	\$ 1.238.023	\$ 212.446	13	\$ 2.761.802
2023		\$ 1.160.132	\$ 1.400.452	\$ 240.319	2	\$ 480.639
TOTAL						\$ 15.443.523

Se tiene igualmente, que el funcionario de primer grado, ordenó el reconocimiento de la mesada 14 en favor de la actora, decisión que se exhibe acertada, pues como se dejó sentado en líneas precedentes, la pretensora causó el derecho desde el 6 de diciembre del año 2010, por lo tanto, deberá Colpensiones reconocer y pagar a la actora la suma de \$8.187.408, por concepto de retroactivo pensional mesada 14. Encontrándose igualmente acertada, la condena a la indexación, toda vez que la misma constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, pues en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo.

Finalmente, resulta necesario adicionar el numeral tercero de la decisión fustigada, en el sentido de autorizar a Colpensiones a efectuar los descuentos en salud a la demandante, respecto de los reajustes ordenados.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y en favor de la activa, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la Sentencia objeto de apelación proferida el 21 de noviembre de 2022 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario instaurado por la señora LUZ MARINA ECHAVARRÍA DE PÉREZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el sentido de indicar, que el valor de la mesada pensional para el año 2017 es de \$1.034.774.

2.- Se **MODIFICA** el numeral tercero de la providencia fustigada, ordenando a **COLPENSIONES** reconocer y pagar a la demandante la suma de **\$15.443.523** por concepto de retroactivo de la reliquidación de la pensión de vejez, generado entre el 1° de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023, advirtiéndole que a partir del 1° de marzo del año en curso, Colpensiones deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional en cuantía de \$1.400.452.

Igualmente, a cancelar la suma de **\$8.187.408**, por concepto de retroactivo pensional causado por la mesada 14.

3.- Se **ADICIONA** en el numeral tercero de la sentencia apelada, a fin de autorizar a **COLPENSIONES** a efectuar los descuentos en salud a la demandante, respecto de los reajustes ordenados.

4.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

5.- Costas en esta instancia a cargo de **COLPENSIONES**, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

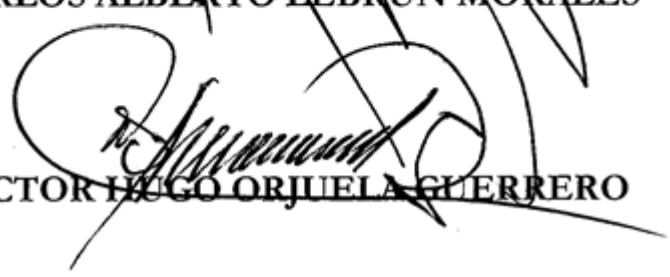
6.- Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO